

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 10° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3076-2020
CARATULADO : BEAUSIRE/FISCO DE CHILE -CDE

Santiago, veintinueve de Julio de dos mil veintidós

VISTOS:

En el folio N° 1 de estos antecedentes, y rectificado a folio N° 6, comparece doña **Diana María Beausire Alonso**, empleada, domiciliada para estos efectos en Calle Regidor Ramón Noguera N° 259, Villa Los Prados I, comuna de Melipilla, quien interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado por el Consejo de Defensa del Estado a través de doña Ruth Israel López, ambos domiciliados en Agustinas N° 1687, de la comuna de Santiago.

Señala que del matrimonio entre Wilfrid Richard Beausire Pascal, y doña Rosa Herminia Inés Alonso Boudat, nacieron ella y sus tres hermanos, Guillermo Roberto, Juana Francisca y Mary Ann. Añade que tuvo una infancia tranquila y que con sus hermanos mantenía una relación de cercanía y amor, lo que se acrecentó aún más al momento de fallecer su padre en el año 1958, quedando su madre a cargo de la familia.

Relata que luego contrajo matrimonio con German Holtheuer Finch en el año 1965, y tuvo 3 hijos, German, Carolina y Diana María, dedicándose completamente a su familia, y no participando en política ni movimiento alguno.

Indica que en el año 1970 su hermana Juana Francisca viajó a Francia por estudios, su hermano Guillermo era corredor de la Bolsa de Comercio de Santiago y su hermana Mary Ann era funcionaria del Departamento de Cultura del Ministerio de Educación, y además era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, junto a su pareja Andrés Pascal Allende, quien desde el año 1974 pasó a ser Secretario General del movimiento, convirtiendo a ambos en objetivo primordial de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Manifiesta que a fines del año 1974, en los momentos más críticos de la represión, su hermana Mary Ann decidió que su hija de 1 año y 10 meses se fuera del país con su hermana Juana Francisca vía asilo en la embajada de Italia, puesto que tanto ella como su pareja corrían peligro, permaneciendo escondidos de la DINA, lo que implicaba estar cambiándose de una casa a otra.

En ese contexto, el 2 de noviembre de 1974, alrededor de las seis de la tarde, fue detenida en calle Alférez Real N° 1217 de la comuna de Providencia, por agentes de la DINA, quienes la trasladaron vendada y maniatada al centro Cuatro Álamos. Una vez que llegó a ese lugar, le quitaron todas sus pertenencias



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

y la llevaron a la celda N° 5, donde había 12 personas más, contando solo con dos camarotes para todas ellas. Añade que a eso de las diez de la noche la llevaron vendada con otras personas, entre las cuales estaba su madre Inés Alonso Boudat, quien también había sido detenida ese mismo día, en José Domingo Cañas, donde fue interrogada varias horas acerca de Sergio Pérez, a quien no conocía, pero que después supo que era compañero de Lumi Videla, conocida militante del MIR, enterándose luego de volver a su celda que se encontraba allí muy mal herida porque se quejaba mucho. Indica que posterior a eso tuvo noticias que la habían matado esa misma noche, dejando su cuerpo abandonado en la embajada de Italia.

Agrega que se mantuvo allí hasta el 4 de noviembre, día que la regresaron a Cuatro Álamos.

Sostiene que entre los días 15 y 16 de noviembre la trasladaron a la calle Irán N° 3037, centro de detención conocido como “Discoteque” o “Venda Sexy”, lugar donde se le interrogó por un largo rato sobre todas las personas que tenía en su agenda telefónica, la que nunca recuperó.

Explica que entre los días 5 y 6 de diciembre del mismo año, la transfirieron a Villa Grimaldi siempre vendada, dejándola de pie a pleno sol por un largo tiempo, amarrada a un madero que imaginó que era como los que se usan para atar caballos.

Agrega que le era posible mirar por debajo de la venda divisando una especie de tronco, y que estando allí escuchó la voz de su hermano Guillermo, quien también había sido secuestrado por la Dina, encontrándose desaparecido hasta ese día. Señala que pasó su mano por la venda y pudo constatar que llevaban a un hombre a rastras, y que estaba en muy mal estado, deduciendo que era su hermano ya que reconoció su voz, quedando petrificada en ese momento. Enseguida, indica que recibió un fuerte golpe con un palo u objeto de metal en su pie izquierdo, lo que la hizo caer de boca en el tronco que había visto antes, y que con antelación a dicho acontecimiento, ya tenía molestias en su pie, lesión que con el tiempo se transformó en un esguince de tobillo.

Arguye que en Villa Grimaldi la llevaron directo a una celda en la cual estaban torturando, y que los gritos desgarradores de las personas que se encontraban allí, le produjeron pena y le destrozaron el alma. La dejaron vendada y sentada en ese lugar, por lo que hasta el día de hoy siente esos gritos terribles de hombres y mujeres.

Expone que no solo oyó gritos, sino también garabatos, dichos por quienes atormentaban a los detenidos, y que cuando la interrogaban, la amenazaban con



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

llevarse a sus hijos y torturarlos frente a ella si no entregaba información de su hermana.

Abunda que durante su estadía en Cuatro Álamos los guardias golpeaban las puertas de las celdas, aterrorizándolos y que en dos oportunidades la llevaron a la oficina del jefe de ese recinto, Orlando Manzo Durán, el que le indicaba que debía sentarse en el escritorio con las piernas cruzadas mientras el pasaba a su alrededor manifestándole que “tenía lindas piernas”, agregando que de esa situación es todo lo que recuerda con mucho esfuerzo y amargura. Mientras estuvo en ese lugar, su mente estaba con sus hijos de 9, 7 y 1 año 8 meses, de los que no tenía información alguna desde su detención, desconociendo quien los tenía a su cuidado.

Finalmente, sostiene que fue liberada el 31 de diciembre de 1974, luego de estar alrededor de dos meses detenida, encontrando a sus hijos en diversas casas de familiares de su ex marido, y que su hija más pequeña no la reconoció, ya que a su cuñada la llamaba mamá, lo que le causó una grave impresión.

Concluye que hasta el día de hoy, la experiencia vivida le cambió su vida, ya que antes de lo ocurrido disfrutaba y era feliz, pero que luego de todo lo que vivió nunca más fue la misma persona de antaño, ya que siente una permanente angustia de no tener conocimiento de la ubicación de su hermano, y además el recordar y pensar en su estancia obligada en aquellos lugares escuchando los gritos desesperados, los que conviven con ella todos los días de su vida.

Cuenta que salió con su familia a Alemania Federal, y que luego se trasladó a Gran Bretaña, lugar en que comenzó a torcerse más seguido su pie, por lo que recibió algunas sesiones de fisioterapia.

Luego indica, que en el año 1979 se fue a La Habana, trasladándose al Hospital Frank País, y sometiéndose aproximadamente un año a fisioterapia, lo que no le produjo mejorías, por lo que tuvo que operarse del tobillo izquierdo el 15 de mayo de 1982 a causa del esquinco crónico, con la técnica de injerto de periórtico de peroné.

Señala que el 25 de abril de 1995 nuevamente la intervinieron, con el diagnóstico de artritis subartralina, realizándole una triple artrodesis de tobillo izquierdo. Actualmente su pie de inflama mucho cuando camina, pero que no lo ha torcido atendido que tiene grapas que lo sujetan interiormente.

Sostiene en apoyo a su pretensión lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la Republica, la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado y los artículos 2284 y 2314 y siguientes del Código Civil. A su vez hace alusión al Convenio de Ginebra, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la Convención Americana



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

de Derechos Humanos; la Convención del año 1968, sobre sanciones de los crímenes de contra la humanidad, y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y contra la Humanidad de 1968, los cuales se encuentra ratificados por Chile.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda civil en juicio ordinario de responsabilidad extracontractual con indemnización de perjuicios en contra del Fisco del Fisco de Chile, ya individualizado, someterla a tramitación y que, en definitiva se condene al pago de la suma de \$200.000.000 por concepto de daño moral descrito precedentemente, más reajustes e intereses contados desde la notificación de la demanda y hasta su pago efectivo, o la suma que el Tribunal determine en su oportunidad, con costas.

Que a folio N° 16, comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa de Estado, en representación del Fisco de Chile, quien viene en contestar la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasa a exponer.

Realiza un breve resumen de los hechos incoadas por la actora en su libelo, para luego contestar la demanda ejerciendo las defensas y alegaciones, y además oponiendo excepciones.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, toda vez que la demandante ya fue indemnizada.

Señala que el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por transgresión a los derechos humanos debe comprenderse desde el punto de vista jurídico nacional e internacional, con la llamada Justicia Transicional.

Refiere que las negociaciones entre el estado y las víctimas demuestran que toda reparación es una decisión compleja de destinar recursos económicos públicos que satisfagan ciertos tipos de necesidades públicas a otras radicada en grupo de personas más específicos. Dichos intereses se muestran normalmente en la diversidad de contenidos que se proponen como programa de reparación en las Comisiones de Verdad o Reconciliación. Estos programas incorporan beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otros análogos diversos que se remiten a la entrega de una cantidad determinada de dinero y que atendida la complejidad de estas negociaciones, muchas veces se privilegia a algunos grupos por sobre otros o se compensen ciertos daños y se dejen de lado otros o simplemente estos se fijan por vía legal, luego de un acuerdo público.

Indica que respecto al segundo objetivo, la Comisión de Verdad y Reconciliación, llamada Comisión Rettig en su informe final, planteó una serie de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

propuestas de reparación, dentro de las cuales estaba la “pensión única de reparación para los familiares directo de las víctimas”, y algunas prestaciones de salud. Dicho informe originó la dictación de la Ley N° 19.123 mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación Reconciliación, siendo el mensaje principal del proyecto de esa ley, el buscar la reparación precisamente del daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas.

Señala que la idea reparatoria se plasmó de forma clara en la ley mencionada, estableciéndose distintos mecanismo a través de los cuales se ha concretado esta compensación, y que esta se ha materializado mediante tres formas; a) reparaciones a través de transferencias directas de dinero, b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específica, y c) reparaciones simbólica. Agrega que a través de aquellas se ha cumplido con el objetivo del proceso de justicia transicional, el que busca precisamente la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En relación a lo anterior, indica que se ha establecido la reparación mediante transferencias directas de dinero, en las que además se incluyó a las personas víctimas de apremios ilegítimos, destacando que la legislación dispuesta al efecto enfrentó dos posiciones que tenían que ver con la entrega de una suma de dinero o bien con una pensión vitalicia, y que en ambos casos los fines eran innegablemente resarcitorios. Respecto a la pensión mensual, también es una forma de reparar el perjuicio y el cálculo para efectos indemnizatorios se efectúa sumando las cantidades que ya se han pagado bajo ese criterio, adicionando las mensualidades que se deben pagar en el futuro, y con ello es posible apreciar el alto impacto que estas han tenido.

Manifiesta que en cuanto a las reparaciones específicas establecidas en la Ley N° 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, la demandante ha recibido beneficios pecuniarios bajo dicha ley, toda vez que en ella se estableció una pensión anual de reparación, además de otorgar otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos en el anexo listado de prisioneros políticos y torturados de la nómina en la cual se les ha reconocido como víctimas. Asimismo indica que la actora recibió recientemente el Aporte Único de Reparación de la Ley N° 20.874 por el monto de \$1.000.000.

Explica sobre las reparaciones que se han hecho de acuerdo a la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, en el sentido que a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, y de la Ley N° 19.992 se les concedió el derecho a la gratuidad en las prestaciones médicas, dadas por el Programa de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de salud del país, el que se accede concurriendo al hospital o consultorio de salud correspondiente al domicilio del beneficiario, e inscribiéndose en la oficina del PRAIS pertinente.

Añade que además del acceso gratuito a este tipo de prestaciones, el PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario, que atienden de forma exclusiva a los beneficiarios del programa. Asimismo adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios de FONASA, además del derecho a organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de autoridad sanitaria crea, así como también obtienen el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y la promoción del resto de los Derechos Humanos, ofreciéndoles apoyo técnico y rehabilitación física. Refiere que de igual forma se incorporaron beneficios educacionales, consistentes en la continuación de los estudios básicos, medios y superiores de manera gratuita, el que además se traspasa a sus hijos o nieto en caso de no utilizarse. Por último también se les ha entregado beneficios en vivienda a través de subsidios.

Aduce que parte de estos procesos de justicia transicional también es importante la reparación del daño moral ocasionado a las víctimas de trasgresión a los derechos humanos, lo que se realiza por medio de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas trasgresiones, destacando la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como la construcción de Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, la fijación del día Nacional del Detenido Desaparecido, mediante el Decreto N° 121, que recae en el 30 de agosto de cada año, la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, establecimiento por Ley N° 20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos, y además de la construcción de distintos memoriales y obras a lo largo del país, así como también de obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, etc.

Por lo anterior, indica, que la indemnización solicitada en la demanda como el conjunto de reparaciones ya mencionadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por idénticos hechos, por lo que no procede que sean reparados nuevamente.

Expresa que, de acuerdo a lo anterior los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado de forma positiva la política de reparación de violaciones de los Derechos Humanos implementada en el país, a tal extremo que ha rechazado otra forma de reparación pecuaria, luego de tomar



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

en consideración los montos ya entregados por el Estados por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Opone, en segundo lugar, la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios de conformidad al artículo 2332 en relación al artículo 2497 del Código Civil, toda vez que la demandante en su presentación señala que la detención ilegal, presión política y tortura sufrida ocurrieron entre los días 2 de noviembre y el 31 de diciembre de 1974.

A su vez y entendiendo que la prescripción se encontraba suspendida hasta el retorno de la democracia, también la acción se encontraría prescrita por haber transcurrido en exceso el plazo contenido en la ley.

A consecuencia de lo señalado, opone la excepción de prescripción correspondiente a 4 años prevista en el artículo 2332 del Código antes aludido, solicitando acogerla y de este modo se rechace íntegramente la demanda intentada.

En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años, prevista en el artículo 2515 en relación al artículo 2514 del Código ya mencionado, toda vez que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la data de la notificación del presente libelo, ha transcurrido con creces el plazo dispuesto en la norma legal ya citada.

Explica las generalidades de la prescripción, señalando que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre de un texto constitucional o legal expreso que así lo prevenga, lo que en este caso no existe. Asimismo indica que la prescripción es una institución universal y de orden público. Sostiene que en el Código Civil, en el Título XLII del Libro IV, se encuentran contenidas las normas que regulan dicha institución y en específico, en su artículo 2497 establece las normas de la prescripción en favor y en contra del Estado.

Colige que la prescripción no exime de responsabilidad ni elimina el derecho a indemnizar, sino que solamente ordena y pone un límite necesario en el tiempo para que se deduzcan en juicio las acciones pertinentes, existiendo una armonía en las leyes que se rigen esta materia y que en este caso la demandante tuvo muchos años para ejercer dicha acción.

Sostiene que la acción indemnizatoria no tiene un carácter sancionatorio, si no que su contenido es netamente patrimonial, y la cual persigue la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que debe aplicarse las normas de prescripción contenidas en el Código Civil. Agrega que, aun cuando la demandante funda la imprescriptibilidad de las acciones en Tratados



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

Internacionales, lo cierto que en ellos tampoco se contempla esa institución en relación a las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad, o bien que prohíban o impidan la aplicación del derecho interno en esa materia. Describe la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra, La resolución N° 3.074 de fecha 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, La Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que en ninguna de ella se establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles. Por lo latamente expuesto, solicita que se rechace la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En otro apartado, manifiesta que en relación al daño e indemnización pedida, es difícil avaluar y apreciar de forma pecuniaria los daños no patrimoniales sufridos, toda vez que su contenido no es de índole económica, o al menos no directamente, atendido que la indemnización de perjuicios tiene como finalidad restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, entregando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, y con ello quede en el mismo estado previo al acto que le produjo daño.

Por este motivo la indemnización del daño moral no se determina ponderando el valor de la pérdida o la lesión experimentada, sino solo otorgándosele a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita minimizar este daño o hacerlo más soportable, a través de una cantidad u otro medio.

Indica que no existe una norma legal que regule lo anterior, por lo que se debe estar a los principios generales y básicos de la cuantificación correspondiente a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado.

Señala que en este sentido la cifra solicitada por la actora es excesiva, teniendo en cuenta las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios que han fijados los Tribunales de Justicia, los que han sido fijados con mucha prudencia.

Señala que en subsidio de anterior, su parte alega que respecto a la fijación del daño moral por los hechos relatados, en ellos se deben considerar todos los pagos recibidos durante todos estos años por la demandante de parte del Estado, conforme a las leyes ya mencionadas, las que además seguirá percibiendo a título de pensión, así como también los beneficios extramatrimoniales, cuyo objetivo también es la reparación del daño moral. Añade que el no accederse a esta petición, involucraría un doble pago por el mismo hecho, lo que es contrario a los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

principios jurídicos básicos del derecho. Asimismo señala que debe tomarse en cuenta los montos establecidos en las sentencias dictadas por los Tribunales en esa materia.

Finaliza haciendo presente sobre la improcedencia del pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes solo proceden una vez que se haya dictado la sentencia que acoja la demanda y ordene dicha obligación y que además la misma se encuentre firme y ejecutoriada, por esta razón, no existiendo sentencia dictada en autos, su representado no tiene ninguna obligación de indemnizar y por tanto no existe suma alguna que reajustar, y además estos solo deben ser contabilizados una vez que se dicta la sentencia que los concede.

Refiere que en atención a los intereses, el artículo 1551 del Código Civil insta de manera expresa que el deudor no se encuentra en mora mientras no haya sido reconvenido y haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

En la presentación folio 20, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, indicando que, de la contestación efectuada por el Fisco de Chile ratifica íntegramente todo lo expuesto en la demanda, tanto en los hechos como en el derecho, y contravirtiendo de forma expresa las afirmaciones contenidas en la contestación, teniendo la demandada que acreditar sus asertos en su oportunidad.

En cuanto a la excepción de reparación satisfactoria o integral aduce que no efectivo que su representada haya sido reparada por el Fisco al momento de recibir reparaciones monetarias y simbólicas, todas vez que los montos que entregan las Leyes N° 19.234 y N° 19.992 y sus modificaciones, corresponden a pensiones de sobrevivencia, las que en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por su representada en su calidad de víctima directa de violaciones graves a los derechos humanos y fundamentales.

Asimismo hace referencia que a través de las alegaciones hechas por el Fisco, este reconoce que se produjeron crímenes de lesa humanidad, los que ocasionaron un daño moral a la víctima de autos, y que por lo demás los pagos que dicha institución ha efectuado implican un acto real y un reconocimiento de la responsabilidad que le cabe, extinguiéndose de esta forma la prescripción invocada.

En relación a la excepción de prescripción, hace presente que la normativa establecida en el Código Civil no es la única que se aplica en estos casos ya que también existen otras normas de carácter constitucional, administrativo e internacional que tienen plena validez y que han sido aplicada por los tribunales superiores de justicia, por lo que la demandada incurre en un error al sustentar



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

que estos autos debe resolverse bajo la luz del derecho privado y que además no se condice con la defensa que ha adoptado la demandada, toda vez que en otras oportunidades sí han reconocido una normativa especial que los rige.

En ese sentido, indica que el asunto de autos no se encuentra prescrito, atendido que la acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado no establece plazos de prescripción, sumado al hecho que el Fisco de Chile no reconoce la eficacia de las reglas de responsabilidad establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, efectuando una interpretación antojadiza de las leyes internas y de la normativa internacional, siendo un error ignorar el hecho de que esta ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todos los Estados que han violado los derechos fundamentales de sus habitantes.

Concluye que es erróneo estimar que el caso de autos se encontraría prescrito, ya que no es posible afirmar que haya una desconexión total entre las acciones civiles y las penales, ratificado por los tribunales superiores.

Abunda que integrar la ausencia de normativa regulatoria de la prescripción extintiva en este caso mediante la aplicación analógica de las normas del Código Civil, considerándolo como derecho común y supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta exagerado y desproporcionado, atendido que niega la distinción que existe entre el Derecho Público y el Privado, así como también la particularidad que cabe a cada uno de ellos en las relaciones jurídicas que reglamenta.

Señala que, a consecuencia de lo anterior, la prescripción extintiva de las acciones de reparación por las violaciones de los derechos humanos, deben ser resueltas e integradas mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando relegada la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil.

Respecto del monto demandado, sostiene que no existe dinero alguno que repare lo sufrido por su representada, por lo que se señaló un monto en el libelo, toda vez que una demanda compensatoria no exige pretensiones concretas, pero sin embargo al reconocer en su contestación que al Estado le cabe responsabilidad en estos hechos, no le parece bien el tener que justificar la cifra solicitada, añadiendo que frente a lo vivido por la demandante cuando estuvo detenida, solo puede ser reparado, desde el punto de vista simbólico, emocional y patrimonial, por cantidades que impliquen una mejora efectiva en su calidad de vida, y no solo un reconocimiento simbólico del daño causado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

Hace presente que en lo tocante a los intereses y reajustes que solicitó, dicha obligación del Fisco existe con antelación a la dictación de la sentencia, por lo que no existe discusión alguna respecto del plazo en que los reajustes deban contabilizarse, además este concepto solo implica la mantención del poder adquisitivo de la moneda. En relación a los intereses, señala que estos se devengan desde el incumplimiento y que el cómputo de ellos, han sido correctamente efectuados en la demanda.

En el folio 23, al evacuar el trámite de la dúplica, la demandada reitera todas las alegaciones, excepciones y defensas hechas valer en la contestación, solicitando el rechazo de la acción interpuesta.

En el folio N° 27, se recibió la causa a prueba, fijándose los puntos substanciales, pertinentes y controvertidos.

Finalmente, en el folio N° 49, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRINMERO: Que, en el folio N° 1, y rectificado a folio N° 6, comparece doña Diana María Beausire Alonso quien deduce demanda en juicio ordinario de responsabilidad extracontractual con indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, ambos ya individualizados, solicitando tenerla por interpuesta, acogiéndola a tramitación y en definitiva que se le condene al pago de \$200.000.000, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta su pago efectivo, o la suma que el Tribunal determine, con costas.

Funda su demanda, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueron expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan expresamente por reproducidos para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Por su parte, en el folio N° 16, comparece doña Ruth Israel López, en representación del Fisco de Chile, quien estando dentro de plazo legal contesta la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas esgrimidos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan íntegramente por reproducidos para todos los efectos legales.

TERCERO: En la resolución folio 27, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales iba a versar, los siguientes:

1.- Efectividad de haberse verificado los hechos sobre los que hace consistir el actor su demanda. En la afirmativa anterior, efectividad que tales



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

hechos hayan causado daños y perjuicios a la demandante, en su caso, naturaleza y monto de los mismos;

2.- Efectividad de haber obtenido la parte demandante reparación de los supuestos perjuicios cuya indemnización ha demandado, en la afirmativa, naturaleza, época y monto de los pagos efectuados.

3.- Concurrencia de los elementos de hecho y antecedentes constitutivos de la prescripción extintiva de la acción alegada y de su interrupción en su caso.

CUARTO: En apoyo a sus pretensiones, la parte demandante ofreció los siguientes antecedentes al proceso:

I-PRUEBA DOCUMENTAL:

1-En el folio 37, nómina de personas reconocidas como víctimas en Informe Valech,

2-En el folio 37, certificado extendido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de fecha 19 de noviembre de 2019.

3- En el folio 37, certificado médico extendido por el doctor Orestes Venero Jiménez, del Hospital Ortopédico Nacional Docente “Frank Pais”, en Ciudad Habana, de fecha 30 de noviembre de 1995.

4-En el folio 37, certificado médico extendido por el Doctor Eugenio Renedo, del Centro Radiológico Plaza Baquedano, de fecha 5 de febrero de 2004.

5-En el folio 40, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, con sus respectivos anexos.

En dicho informe en el numeral 2938 se da cuenta que la demandante Diana María Beausire Alonso, RUT N°5.201.153-1, fue víctima de prisión política y tortura (página 671).

En relación con los documentos señalados en el escrito folio 37, si bien se ofrecieron en la etapa procesal correspondiente, la parte demandante no cumplió con lo ordenado en la resolución folio 39, por lo que al no tenerse por acompañados en la forma dispuesta por la ley, no podrán ser considerados al momento de resolver.

II-TESTIMONIAL, ofrecida en el folio 35 y rendida en el folio 43:

1-Declaración de Sylvia María Castillo Araya, profesora, quien legalmente examinada, sin oposición de tachas, expone que sabe perfectamente que la demandante fue prisionera política de la Dina, junto a su madre.

Agrega que sabe que, “y lo que he visto de ella porque no somos amigas”(sic) es un daño permanente y una recurrencia a referir y manifestar lo que vivió, lo que ha repercutido en su vida, la que indica que se destrozó por completo, pues “ella vive recordando y vive pensando en lo que le sucedió, el daño que le hicieron fundamentalmente a ella y también a su familia”. Precisa que es una



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

situación muy dolorosa, porque entiende que ella es un ser humano digno y que todos los proyectos de vida y de familia “se los rompieron brutalmente”.

Aclara que trabaja en el Comité ProPaz y en la Vicaría de la Solidaridad, donde fue voluntaria, que es familiar de detenido desaparecido y de ejecutado político. En ese contexto, dice que el caso de la actora fue muy comentado y muy conocido, por cuanto toda la familia se vio involucrada; su hermano Guillermo está desaparecido. Destaca el daño causado a la actora en esa época, que tenía a su marido e hijos pequeños en el momento que se la detiene, la que se prolongó por muchos días y que su situación de angustia es permanente. Añade que es un daño psicológico, emocional; se deshizo su familia propia, su familia nuclear.

2-Declaración de Camila Natalia Pascal Castillo, editora y productora, quien ratifica el daño causado y la exposición de la demandante a tratos vejatorios, donde destaca que “además de sufrir tortura, fue violada”, todo esto en compañía de su madre. Además también en esos momentos aunque ella estaba vendada y amordazada reconoció la voz de su hermano que también había sido detenido y que después desapareció. Añade que esta situación es aún más terrible porque ella no tenía ningún tipo de militancia política, tampoco el hermano, ni su madre, por lo tanto es toda una familia que es afectada y reducida para presionar a una de sus hermanas Mary Ann Beausire a que se entregara y poder detener con ella a uno de los dirigentes principales del MIR.

Dice que puede dar fe de eso pues señala que convivió con la actora “de niña”, vivieron en la misma casa y aunque señala no haber permanecido cercana a ella, sabe y conoce su proceso de vida, cómo todo ello la llevó a la separación de su pareja. Por otra parte, destaca que es una persona que no tuvo un desarrollo en su vida laboral, afectiva, en su relación con su marido por toda esta situación, todo el dolor, el daño a su cuerpo por la violación, concluyendo que nunca pudo retomar su vida como era antes.

Sostiene que el daño que la demandante experimentó en todos estos sucesos que narra causó una descomposición de la familia, todo estos sin que tuviera militancia política, lo que le motivó la salida del país. Agrega que “también implica un daño material porque ella no pudo seguir desempeñándose normalmente en su vida profesional y familiar; hay una interrupción de todas las proyecciones a futuro que ella tenía, por lo tanto hay un daño material y también uno familiar en la cohesión de su familia”.

QUINTO: Respecto de la parte demandada, proporcionó el siguiente medio de prueba:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

-En el folio 28, contestación de oficio por parte del Instituto de Previsión Social, Departamento de Gestión de Beneficios Reparatorios, de fecha 9 de febrero de 2021.

El aludido documento informa que Diana María Beausire Alonso, en calidad de exonerada política ha recibido la suma de \$28.027.109.- por pensión Ley 19.234; \$23.382.109.- por concepto de pensión Ley 19.992; \$1.000.000.- por concepto de bono Ley N°20.874 y \$538.817.- de aguinaldos, lo que a la fecha hace un total de \$52.948.035.-

Se precisa que la pensión actual que recibe es de \$194.394.- y que no ha recibido otros beneficios de reparación del instituto aludido.

I-En cuanto a la excepción de reparación integral

SEXTO: En primer término, corresponde resolver la alegación opuesta por la demandada, y que dice relación con la reparación integral de la actora destinada a enervar la acción indemnizatoria por daño moral pretendida, fundada en los beneficios de los que ha recibido la actora conforme a las Leyes 19.123, 19.992 y 20.874.

Ha acompañado como antecedente el documento refrendado en el considerando quinto, en la que consta que la demandante ha recibido las prestaciones que se indican.

SEPTIMO: Que, en el contexto político vivido a nivel nacional entre los años 1973 y 1990, el artículo 1 de la Ley N°19.123 dispone la creación de la *“Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Su domicilio estará en la ciudad de Santiago”*.

Su objeto será la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por decreto supremo N° 355, de 25 de abril de 1990, y las demás funciones señaladas en la presente ley”.

En ese sentido, una de las finalidades de la aludida Corporación, conforme al numeral 1 del artículo 2 de la citada ley consiste en *“Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”*, recayendo en las personas consideradas víctimas de violaciones a los derechos humanos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

En refuerzo de esta normativa, el artículo 1 de la Ley N°19.992, concede una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

En el mismo orden de cosas, la Ley N°20.874 concede a dichas personas un beneficio económico único, tal como dispone su artículo 1°.

OCTAVO: Respecto de la defensa en estudio, no desconoce este sentenciador los esfuerzos y la implementación de políticas de Estado vigentes hasta hoy en miras a perseguir la reparación del daño causado por agentes de Estado en el contexto del régimen vigente entre 1973 y 1990, recogidos a través de los informes de la Comisión de Prisión Política y Tortura, que refrendan e incorporan a las víctimas de violaciones a los llamados Derechos Humanos, cuya dimensión político-social, precisamente, apunta a la reparación y fortalecimiento de las instituciones democráticas y la consolidación de la responsabilidad del Estado frente a estas acciones, lo que también se ha traducido en las diversas persecuciones penales aún vigentes hasta el día de hoy.

En este escenario, es claro que la Ley N°19.123 y las que se han dictado posteriormente han concedido una serie de beneficios, entre ellos los directamente pecuniarios, tanto en materia de salud como otros de carácter simbólico, los que se enmarcan dentro de las finalidades de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, según su artículo 2 antes aludido, destinadas a "promover la reparación moral" de las víctimas.

Sin embargo, el hecho que estas prestaciones se hayan fijado por ley en beneficio de las aludidas víctimas gira en torno al concepto de reparación en todas sus dimensiones y, precisamente, dentro de la finalidad que se anota en el párrafo precedente, esto es, la reparación moral, hecho que no supone impedir el ejercicio de acciones civiles contra el Estado por parte del actor.

No consta que las prestaciones otorgadas supongan una renuncia a la acción civil indemnizatoria que por este acto se ejerce, lo que permite colegir, en principio, que la excepción reclamada por la demandada es improcedente.

A mayor abundamiento, las diversas prestaciones reconocidas a nivel legal no apuntan necesariamente a resarcir la dimensión moral del sujeto, sino también



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

el ámbito estrictamente patrimonial y recuperar la pérdida de chances causadas por los actos de agentes estatales (lucro cesante), los que también se ven dirigidos a sus parientes, tales como los referidos al ámbito educacional y en materia de salud.

NOVENO: En definitiva, este sentenciador rechazará la excepción en estudio conforme al razonamiento precedente.

II-En cuanto a la excepción de prescripción extintiva.

DECIMO: De manera subsidiaria a la excepción antes descrita, la parte demandada opuso la de prescripción extintiva de la acción civil, sea en los términos dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, o bien conforme al artículo 2515 del mismo cuerpo legal, en consideración a la data de los hechos que sirven de sustento de la acción en relación con la interposición y posterior notificación de la demanda.

UNDECIMO: En relación con esta materia, la institución de la prescripción, en los términos del artículo 2492 del Código Civil, que precisamente se encuentra destinada a la consolidación de la “seguridad de las posesiones y del crédito”, tal como indica el mensaje de dicho cuerpo normativo.

En relación con esta premisa, el artículo 2493 del mismo cuerpo legal es claro en señalar que *“El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”* y que el artículo 2497 establece que *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Respecto a esta materia, conforme a la responsabilidad civil extracontractual que se reclama, el artículo 2332 del Código Civil establece que *“Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”*.

DUODÈCIMO: Es un hecho de la causa –y que al menos no aparece controvertido por la demandada-, que la actora sufrió la detención por parte de agentes estatales, esto es, entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre de 1974, en el contexto político vigente en la época.

Al respecto, es necesario destacar el concepto de delito de lesa humanidad que se encuentra regulado en la Ley N°20.357, que en su artículo 1° indica que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

“Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurren las siguientes circunstancias:

2º. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”.

El mismo articulado, luego de referirse a los delitos de lesa humanidad, al genocidio y crímenes de guerra, dispone en el artículo 40 que *“La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”.*

En relación con lo expuesto, del informe de la Comisión respectiva –y acompañado a los autos–, se describen los delitos cometidos entre 1973 y 1990, los que obedecieron a razones de índole política y que se encuentran vinculados a actos del Estado, en la forma que en dicho documento se consigna latamente.

DECIMOTERCERO: En este análisis, y por aplicación del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, se desprende que rige, dentro de ese estándar normativo, lo dispuesto en artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que ha sido ratificado por el Estado Chileno y se encuentra actualmente vigente, que dispone al efecto que *“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada”.*

Sobre el particular, y en diversas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido enfática en establecer, por una parte, que *“que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo”*, mientras que *“la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”* (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia *“Velásquez Rodríguez vs Honduras”*, dictada con fecha 21



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1
de julio de 1989, párrafos 25 y 26. Consultado en <https://summa.cejil.org/es/entity/i0qbrq3n93utmx6r?page=9>; fecha de consulta 28.04.2022)

DECIMOCUARTO: Todo este razonamiento que se viene sosteniendo hasta acá permite llevar a la conclusión que, en primer término, en materia de Derecho Internacional, y reconocido a nivel interno, los llamados delitos de lesa humanidad gozan de la imprescriptibilidad de la acción penal.

En segundo lugar, sobre la base de la vulneración de los derechos que esas acciones lesivas han causado sobre sectores de la población, los estatutos internacionales que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, conceden un derecho a reparación integral, lo que no sólo permite el derecho al recurso y a la acción judicial, sino al resarcimiento de todo perjuicio patrimonial ocasionado y del que se requiera efectiva reparación.

En este aspecto, lo refrendado en el considerando anterior deja en evidencia que, frente a las dificultades en la persecución de estos hechos y la satisfacción del derecho a la “reparación integral”, resulta contraproducente entonces aplicar un estatuto de prescripción extintiva a hechos de esta naturaleza, por cuanto se oponen al ordenamiento internacional frente a esta prerrogativa de reparación integral, que resulta predominante por sobre la consolidación de las relaciones jurídicas en base al mero transcurso del tiempo. De lo contrario, se vulneraría precisamente aquel derecho antes citado, por lo que debe necesariamente la acción civil derivada de estos hechos compartir la misma imprescriptibilidad que la acción penal.

No es obstáculo, a juicio de este sentenciador, que los tratados y la normativa internacional aplicadas en esta litis sean posteriores en cuanto a su vigencia al ordenamiento interno, pues los primeros predominan en su aplicación al referirse a derechos inherentes a la naturaleza humana y, por ende, reconocidos dentro del contexto internacional, dado su interés público, los que tiene como base principios de índole superior y que buscan la protección de los derechos más esenciales de cada ser humano.

Además, las normas de prescripción rigen esencialmente para relaciones entre privados y, en el caso de aplicarse en los términos del artículo 2497 del Código Civil, dicen relación con toda cuestión contractual y patrimonial en las que predomina el interés privado en las relaciones con el Estado y sus órganos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

Disponer su aplicación por sobre los tratados internacionales, además, colisiona con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al prescribir precisamente que *“Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”*.

Este es un tema que, por cierto, ha sido reconocido ya por la Excma. Corte Suprema en diversas sentencias dictadas por la materia (Rol N°8318-2018; Rol N°29944-2019; Rol N°29.617-2019; Rol N°79.259-2020, entre otras).

DECIMOQUINTO: Por tanto, en relación con la alegación formulada por la demandada en análisis, tanto en su fundamento principal como subsidiario, deberá ser rechazada al estimar que la acción indemnizatoria en este tipo de materias es imprescriptible atendidos los fundamentos esgrimidos precedentemente.

III-En cuanto al fondo:

DECIMOSEXTO: Que la acción deducida por la actora en el folio 1 de estos antecedentes busca resarcir el perjuicio moral que le han causado los agentes del Estado, reconocidos en el Informe de la Comisión Valech 1, habiendo sido sujeto a una detención entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre de 1974, sumado a la aplicación de tormentos y tratos vejatorios, reclamando resarcimiento de las consecuencias que de ello derivaron en su esfera personal.

DECIMOSEPTIMO: Que es un hecho de la causa que la parte demandada no ha controvertido la ocurrencia de los hechos denunciados, ni su connotación ni el contexto en que se promovieron aquellos.

En todo caso, y tal como fue fijado en la resolución que recibió esta causa a prueba, en el primer hecho controvertido se ha establecido acreditar la efectividad de los hechos sobre los que hace consistir el actor en su demanda.

Para ello, existe un cúmulo de antecedentes los que, sumados al hecho que la demandada no los controvierte de manera directa ni agrega otros antecedentes que sostengan lo contrario, que permiten tener por acreditado que la actora sufrió una detención por agentes del Estado.

En primer término, del documento acompañado en el folio 40, esto es, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, con sus respectivos anexos, que contiene la nómina de personas reconocidas como víctimas en Informe Valech, consta que la demandante figura en el número 2938.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGSLP

«RIT»

Foja: 1

En su complemento, la declaración de las testigos ofrecidas por la actora, esto es, las señoras Castillo Araya y Pascal Castillo, quienes deponen en el folio 43 de manera circunstanciada la situación vivida por la actora, de la que si bien no han tomado conocimiento presencial de aquellos hechos, los han conocido a través de la propia parte demandante, lo que junto con la apreciación que dichas declarantes exponen en torno a la situación vivida y consecuencias en su persona que sí han apreciado directamente, dan razón pormenorizada de sus dichos, declaraciones que sirven de base para una presunción judicial.

Esta última situación, sumado a los antecedentes documentales antes señalados, configuran de manera grave, precisa y concordante una presunción judicial que permite formar el convencimiento de este sentenciador respecto de la detención sufrida por la señora Beausire Alonso realizada por agentes del Estado donde habría recibido un trato vejatorio y que, ante esta situación, ha sido considerada como víctima.

DECIMOCTAVO: Al haberse dilucidado lo anterior, la parte demandante reclama la indemnización de perjuicios causados por la detención practicada por agentes del Estado, en circunstancias que le han generado un menoscabo moral que describe producto de la situación vivida por ésta.

Sobre este punto, la demandada hace presente que el daño moral no se cuantifica a partir de un aspecto económico en particular, por lo que entiende que lo solicitado es excesivo, teniendo en consideración todas las acciones que el Estado ha llevado a cabo a fin de obtener la aludida indemnización y, en subsidio de esa alegación, la regulación debe considerar los pagos ya recibidos y efectuados por el Estado, en armonía con los montos establecidos por los tribunales, los que ha recibido el actor durante años y que seguirá percibiendo con posterioridad.

DECIMONOVENO: En esta materia, junto con reiterar las normas citadas con anterioridad respecto al derecho de reparación integral que contempla el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2314 del Código Civil señala que *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”*, a lo que el artículo 2329 del mismo cuerpo legal, en su inciso primero, dispone que *“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”*.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

Se ha reconocido que, dentro de la clasificación del daño, atendida su naturaleza, se encuentra el llamado daño moral, que contempla la aflicción, el daño en los sentimientos e integridad espiritual de una persona, que no forman parte del aspecto patrimonial propiamente tal, y que de alguna forma se busca resarcir mediante la indemnización de perjuicios requerida.

Como perjuicio que es, debe ser probado precisamente por quien lo alega, conforme al artículo 1698 del Código Civil.

Si bien es dable presumir que una consecuencia lógica de una experiencia traumática como la que la demandante ha explicado en su demanda consiste precisamente en un daño moral de tal entidad que provocó de manera indiscutible un cambio en el desarrollo personal y que permanece en su espiritualidad hasta el día de hoy, como todo perjuicio se requiere prueba para sostener, con precisión, la forma en que ese daño moral no solamente existe, sino que también cómo se ha manifestado o repercutido en el afectado, esto es, su intensidad, de tal manera que ello influirá en el quantum indemnizatorio a fijar.

VIGESIMO: Para su acreditación, se acompañaron una serie de antecedentes:

- a) En el folio 40, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, con sus respectivos anexos, en el que consta en su numeral 2938 que la demandante Diana María Beausire Alonso, RUT N°5.201.153-1, fue víctima de prisión política y tortura (página 671).
- b) En el folio 43, declaración de Sylvia María Castillo Araya, profesora, quien legalmente examinada, sin oposición de tachas, expone que sabe perfectamente que la demandante fue prisionera política de la Dina, junto a su madre y que, a consecuencia de ello, su vida se destrozó por completo, específicamente sus proyectos de vida personal y familiar.

Destaca el daño causado a la actora en esa época, que tenía a su marido e hijos pequeños en el momento que se la detiene, la que se prolongó por muchos días y que su situación de angustia es permanente. Añade que es un daño psicológico, emocional; se deshizo su familia propia, su familia nuclear.

- c) En el folio 43, declaración de Camila Natalia Pascal Castillo, quien sostiene el daño causado y la exposición de la demandante a tratos vejatorios, donde destaca que “además de sufrir tortura, fue violada”, todo esto en compañía de su madre.

Sabe y conoce su proceso de vida, cómo todo ello la llevó a la separación de su pareja.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

Agrega que “también implica un daño material porque ella no pudo seguir desempeñándose normalmente en su vida profesional y familiar; hay una interrupción de todas las proyecciones a futuro que ella tenía, por lo tanto hay un daño material y también uno familiar en la cohesión de su familia”.

VIGESIMO PRIMERO: Así las cosas, este sentenciador estima, de acuerdo a la prueba refrendada en el considerando anterior, que la actora ha acreditado que la detención sufrida por ésta en 1974, le ocasionó perjuicio moral pues afectó su dimensión espiritual.

En este acápite del razonamiento sobre el daño causado, es importante precisar que los antecedentes acompañados y ya refrendados apuntan precisamente a sostener dicho daño y su permanencia, especialmente la testimonial rendida que ratifica la alteración sufrida por la afectada en su estilo de vida personal y familiar, traducido no solamente en la angustia que su recuerdo genera sino que en las proyecciones futuras en su vida, tal como lo refrendan las testigos que declararon sobre este aspecto en autos, explicando cómo vivió dicha situación y la apreciación de las consecuencias provocadas a causa de ello.

Además, a partir del reconocimiento que se le ha concedido a la demandante en el informe del folio 40 como víctima de prisión política y tortura, permite junto con las declaraciones vertidas una presunción grave, precisa y concordante que logra generar convicción en el sentido que la actora ha padecido grave daño en su espiritualidad, pues se ha sometido a tratos y a una impresión fuerte a raíz de la detención y las situaciones que se vivieron en torno a ella, lo que provoca claramente una alteración en la esfera moral y que, en definitiva, requiere ser resarcido.

VIGÉSIMO SEGUNDO: De acuerdo al razonamiento anterior, este sentenciador estima, dada la magnitud de los hechos sufridos por el actor y las secuelas adquiridas a consecuencia del ilícito cometido en su contra, que deberá regularse el daño moral acreditado en una suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos), regulación que se hace de manera prudencial tomando en consideración la edad de la afectada y las afecciones espirituales y físicas que han sido acreditadas en este proceso.

Asimismo, se deja constancia que la regulación del monto indemnizatorio no ha considerado la totalidad de lo impetrado por la parte demandante atendido que si bien se acredita la existencia del daño invocado, no existen otros elementos de juicio que permitan, con mayor precisión, apreciar el perjuicio ocasionado con



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGSLP

«RIT»

Foja: 1

mayor detalle y que, con ello, su apreciación considere un monto superior al indicado en el párrafo precedente.

VIGÉSIMO TERCERO: Respecto a la alegación de la demandada a fin de considerar los beneficios que el actor actualmente recibe y que fueron acreditados en autos para los efectos de fijar la indemnización que se concede, se rechazará por los mismos motivos consignados al desechar la excepción de reparación integral, en circunstancias que su argumento plantea, en cierto modo, el mismo efecto que se tuvo en consideración al esgrimir que la parte demandante habría sido resarcida de los perjuicios sufridos con las prestaciones legales concedidas en su favor y que actualmente percibe.

VIGÉSIMO CUARTO: En cuanto al reajuste e interés solicitado, será acogido sólo en cuanto se concederá el aludido reajuste de la suma fijada a título de indemnización conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a aquel en que quede ejecutoriada esta sentencia hasta el mes anterior al del pago efectivo y, a su vez, generará intereses corrientes, todo ello contado desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada hasta su pago efectivo.

VIGÉSIMO QUINTO: Finalmente, en cuanto a la condena en costas solicitada, no se accederá a la imposición de dicha carga procesal en circunstancias que la demandada no fue totalmente vencida y que, en todo caso, se estima que la parte demandada ha litigado con fundamento plausible en el proceso.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1698, 2314, 2329, 2332 y 2514, todos ellos del Código Civil, 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 27 de la Convención de Ginebra sobre Derecho de Los Tratados y 170 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I-**Se rechaza** la excepción de reparación integral alegada por la demandada.

II-**Se rechaza** la excepción de prescripción extintiva conforme a los fundamentos contenidos en los considerandos décimo a decimoquinto de esta sentencia.

III-**Se acoge** la demanda interpuesta en el folio 1 de estos antecedentes, sólo en cuanto condena a la parte demandada al pago de una suma de **\$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)** a título de daño moral en favor de la actora.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP

«RIT»

Foja: 1

Dicha suma deberá pagarse debidamente reajustada y con los intereses respectivos de acuerdo a lo señalado en el considerando vigésimo cuarto de esta sentencia.

IV-**Que no se condena** en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida y por haber litigado con motivo plausible.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por don Gastón Villagra Santander, juez titular del Décimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintinueve de Julio de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXXMXXGXLP